

Energica protesta del Gobierno por informe de esa organización

Aministía es "irresponsable"

De acuerdo con la carta del Ejecutivo, Amnistía "no se ha tomado el trabajo de averiguar si hay indicios de que los capturados pudieron incurrir en conductas criminales".

Una energética protesta dirigió anoche el Gobierno a Amnistía Internacional (AI) por el informe publicado el pasado lunes con relación a la captura de Luz Perly Córdoba y Juan Gutiérrez, miembros de la Asociación Campesina de Arauca.

La misiva fue enviada a Irene Khan, secretaria general de AI. Su texto es el siguiente:

"El Gobierno Nacional expresa su preocupación por la persistente campaña de deslegitimación y descrédito de nuestro Estado de derecho. El contenido del comunicado de Amnistía del pasado 23 es un ejemplo.

Insistan ustedes en desconocer el profundo respeto de las autoridades colombianas por los Derechos Humanos, y en descalificar las decisiones judiciales señalándolas como arbitrarias o producto de persecución política.

Amnistía no se ha tomado

el trabajo de averiguar si hay indicios de que los capturados pudieron incurrir en conductas criminales, ni reconoce el hecho cierto de que gozan de la garantía de la defensa, reciben un trato digno y sus procesos tienen control y vigilancia de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

En el caso de la señora Luz Perly Córdoba y el señor Juan de Jesús Gutiérrez, miembros de la Asociación Campesina de Arauca, la Fiscalía, órgano perteneciente a la rama judicial y totalmente independiente del Ejecutivo, ordenó su captura para que rindieran indagatoria por varios delitos. Amnistía, sin conocer el proceso, tachó a los funcionarios judiciales como prevaricadores y dijo que la medida era irregular.

La autoridad judicial tiene la obligación de investigar los hechos, y, al mismo tiempo, dar todas las garantías a los sindicados para controvertir las pruebas. El Gobierno solicita a Amnistía que se abstenga de prejuzgar y permita que fluyan las investigaciones contra quienes pueden haber violado la ley. La Fiscalía investiga sin ninguna discriminación por creencias políticas o ideológicas o condiciones sociales o económicas a los ciudadanos, sean ellos particulares o miembros de la Fuerza Pública.

DOCUMENTO

Captura de dos dirigentes

BOGOTÁ

El pasado lunes 23 del presente mes, Amnistía Internacional en Londres emitió un pronunciamiento acerca del arresto en Colombia, de Luz Perly Córdoba y Juan de Jesús Gutiérrez, directivos de la Asociación Campesina de Arauca (ACA).

El procedimiento judicial se produjo el 18 de febrero. En Bogotá fue detenida Luz Perly Córdoba, presidenta de ACA, y fue señalada por las autoridades como presunta responsable de los delitos de rebelión y concierto para delinquir.

Según AI, "estas acusaciones tendrían como base testimonios de informantes y no en investigaciones judiciales serias e imparciales".

La dirigente Luz Perly Córdoba, según el documento, ha recibido amenazas de paramilitares, razón por la cual "goza de medidas

cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de DD.HH."

Juan de Jesús Gutiérrez, tesoroero de ACA, fue detenido en Arauca y luego llevado a la "estructura de apoyo de la Fiscalía con asiento en la Brigada XVIII del Ejército en la capital de Arauca".

Amnistía Internacional señaló en su pronunciamiento del pasado lunes que "las capturas (de Córdoba y Gutiérrez) coincidieron

con operativos de allanamiento en la oficina de la Asociación Campesina de Arauca, ACA, en el municipio de Arauca, y en la casa de Nubia Vega, otra dirigente de ACA, también en Arauca". A juicio de AI, "estamos presenciando una estrategia coordinada y bien planeada para silenciar al movimiento de Derechos Humanos y así dar la impresión de que la situación está mejorando".

Amnistía basa sus aventuras informaciones en publicaciones de una ONG colombiana que califica de arbitrarias las detenciones por determinados delitos sin considerar si cumplen o no los requisitos legales. Es imprescindible que cese el círculo vicioso e injusto que, primero, califica los actos terroristas en Colombia como oposición armada; segundo, denuncia la represión legal a los criminales describiéndola como violación de los Derechos Humanos y, tercero, justifica la actividad terrorista como una consecuencia de que en Colombia haya quienes violen los derechos y libertades ciudadanas.

Amnistía acusa a la Fuerza Pública, sin acudir a pruebas, de estar aliada con "paramilitares". El Gobierno de Colombia protesta energicamente por esa sindicación genérica e irresponsable y pide su solidaridad a todos los demócratas del mundo, a los gobiernos, a los académicos, a las ONG, a los partidos y movimientos políticos, para que cese el reiterado irrespeto a la Nación colombiana.

Pedimos a Amnistía respeto por el Estado colombiano, cuya legitimidad no se puede desconocer. Como bien dice nuestra centenaria Academia de Jurisprudencia, 'la Nación

tiene derecho, por el solo hecho de su existencia, a la inviolabilidad y respeto de su buen nombre. Como consecuencia de este fuero, todo país amerita el goce del honor, la dignidad y el decoro ante el concierto de las demás naciones del mundo, partiendo del análisis, objetivo, ecuánime e imparcial de su vida interna'.

Que la calumnia quede, señora Khan, quede como dañado instrumento para individuos como Raúl Reyes, autor intelectual de los peores ataques terroristas, quien se atreve a decir que 'los Derechos Humanos son pisoteados grotescamente por el gobierno de Colombia' y que esa es 'la causa principal del alzamiento armado del pueblo de Colombia contra el Estado y sus gobiernos'.

A los opositores, el Estado ha dado, da y seguirá dando todas las garantías. A los críticos les oímos con respeto, aunque reivindicamos nuestro derecho a responder y de que se nos oiga. A los terroristas de las autodefensas y de la guerrilla, se les perseguirá hasta derrotarlos".

Cordialmente,
Rafael Nieto, viceministro de Justicia.

Carlos Franco, director Oficina Derechos Humanos.